

LUCHA

INTERNACIONALISTA

¡Hemos de
pararlo!

MUERTE

CRISIS

REPRESIÓN



Elecciones catalanas: las CUP en la encrucijada

nº 170 enero 2021 - donativo 2 euros

Editorial	pág 3	Migración:	pág 9-11
Muerte, crisis, represión: organizar la resistencia		Badalona, Padrón Vilafranca, Girona con Hamza	
Páginas centrales		Pensiones:	pág 16-17
La CUP en la encrucijada	pág 12-15	De acuerdo gobierno PSOE-UP 2020 a PGE 2021	
Política:	pág 4-5	Mujer:	pág 18-19
Paremos nueva ola represiva. Retirada multas Mordaza		Marea Verde gana aborto legal en Argentina	
Sindical:	pág 6-7	Debate: Internacional progresista.	pág 20-21
Enseñanza pública.		Internacional:	pág 22-24
Unir las luchas también de sectores públicos		10 años revolución Oriente Medio y Norte África	
Juventud: Unir lucha estudiantes y trabajadoras	pág 8	Suplemento: 7º Congreso Mundial de la UIT-CI	

Unidad Internacional de los y las Trabajadoras-Cuarta Internacional (UIT-CI)



Cancelled

del director australiano **Luke Eve**

La situación de pandemia que estamos viviendo desde hace un año trastoca muchas rutinas de nuestra vida, e incorpora incertidumbre y sufrimiento. Los niños, cuando juegan, elaboran representaciones de su realidad inmediata para poderla entender y/o asumir. Los adultos no somos una excepción a esa necesidad: ver nuestras reacciones, y nuestros miedos, identificarnos y crear empatía nos ayuda a relativizar nuestra confusión. Los artistas pueden recrear este contenido, este momento de cotidianidad extraña, y añadirle entretenimiento, y también humor. Y después pueden servirnos el producto bien presentado.

Todo eso lo cumple *Cancelled*: os recomendamos una webserie de 10 capítulos, CADA UNO DE LOS CUALES DURA 9 MINUTOS!

Cancelled es la historia real, hecha guión, del director australiano Luke Eve y de su novia, la actriz valenciana Maria Albiñana, que habitualmente residen en Los Angeles pero que decidieron casarse en Valencia el día 15 de marzo de 2020, e invitaron a 150 personas. El Gobierno español decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión del covid-19 y este hecho confina a Luke y a Maria en un piso de Valencia, junto a Karen, la madre de Luke venida expresamente desde Australia para la boda.

Cancelada la boda, aprovechan el confinamiento para escribir los guiones, vender la idea

a *Screen Australia* (un organismo público que financia producciones de cine y televisión) y grabar con sus respectivos teléfonos móviles.

La tecnología unió cuatro lugares del mundo alejados entre sí: desde Valencia enviaban las grabaciones para editar a Estados Unidos, en la productora More Sauce; de la música y el sonido se encargaban en Australia, y el canal argentino UN3TV se encargó de diseñar los títulos y de desarrollar los efectos visuales. Esta red les permitió estrenar en Facebook el primer capítulo el miércoles 13 de mayo. A mi aquel día me hicieron reír y también me hicieron mucha compañía, y esperé como agua de mayo el segundo capítulo para el siguiente miércoles... y entonces ya me habían atrapado, así hasta el capítulo 10.

Han pasado unos cuantos meses, han ganado premios y se han dado a conocer. Ahora los 10 capítulos de 9 minutos ya los podéis visualizar, además de en *Facebook*, en la plataforma gratuita *VIX*. Existe una aplicación que os podéis instalar, pero también se puede visualizar directamente *on line*, sólo con hacer clic aquí:

<https://www.vix.com/tv/serie/series/cancelled>

Vosotros podéis decidir si queréis verla en la pantalla del ordenador, o si tenéis suficiente con la pantalla de la tablet o del teléfono móvil.



Un año de Gobierno PSOE-UP: pandemia, crisis y represión

Pandemia

Un año marcado por la COVID. La trágica situación de la sanidad pública no ayudaba, pero la respuesta del Gobierno fue nefasta: sin medidas para las residencias de ancianos privatizadas que se pagó con la vida de miles de abuelos, sin las EPIs mínimas para nuestros sanitarios que se infectaron por centenares, y una militarización de la crisis que no usó el estado de alarma para poner ni la sanidad privada ni las empresas al servicio del sistema público de salud. El exceso de mortalidad, según el INE a 20/12/20 era de 77.688 (28.000 más de los declarados en esa fecha de 49.260), 168 fallecidos/100.000hab, lo cual, a nivel de tasa de fallecidos nos sitúa en segundo lugar a nivel mundial. Para remate, el gobierno «más progresista de la historia», mientras con la UE acapara dosis para 800M de personas cuando sólo tienen 450M, es uno de los que bloquea la liberalización de las patentes que plantea la India y Sudáfrica, para que pudieran abaratarse y ser asequibles a los países pobres...

Miseria

Se han gastado miles de millones en blindar al IBEX y con ERTes para pagar salarios a empresas con beneficios y filiales en paraísos fiscales, permitieron a las grandes fortunas, en el primer estado de alarma, obtener un 16% de beneficios. El RDL 36/2020 del último día del «año de la pandemia» que regula la adjudicación de los 140.000M de euros que han de llegar de la UE, facilita que vayan a las grandes corporaciones que, como Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol o El Corte Inglés, ya han anunciado proyectos multimillonarios.

En cambio, los despidos y cierres de empresa se han sucedido, sin ninguna política de defensa del empleo. Contra lo prometido por Yolanda Díaz, hubo despidos y los ERTes se convirtieron en EREs, así como también se impuso la patronal en la congelación del SMI. Los compromisos que hubieran sido vitales se han incumplido: no hay derogación de la reforma laboral, ni siquiera del artículo 51 que permite a las empresas despedir unilateralmente sin autorización administrativa. PSOE y Podemos, votaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, por las que se impulsa un nuevo recorte y más privatización con las pensiones de empresa. PSOE-UP-IU tampoco han garantizado los subsidios: a fines de año, muchos trabajadores/as en ERTE siguen sin cobrar, con un SEPE desbordado, y sin tramitarse el ingreso mínimo vital que iba a ser la panacea para Igle-

sias: 3,8M en paro, 747.000 en ERTE. En octubre Oxfam Intermón daba su informe anual: 1,1M más de pobres –incluidas trabajadoras en precario– como impacto socioeconómico de la pandemia, hasta alcanzar los 10,9M, el 23,07% de la población.

Represión

El mantenimiento de los sillones del Gobierno, exigen sumisión a la Corona, protegiéndola incluso ante los escándalos que se suceden y el PSOE –junto a Vox, Ciudadanos y el PP– han impedido que sean investigados en el Congreso. Pero aún y así, a pesar de haber puesto a cuerpos policiales y ejército en las ruedas de prensa del primer estado de alarma, de haber condecorado a policías y guardias civiles que reprimieron el 1O en el «a por ellos»... ni el ejército, ni la judicatura, ni las cloacas del estado, dejan de hacer ruido de sables. Y Podemos termina siendo cómplice, como cuando vota con PSOE, PP, C's y Vox, para que no sea pública la hoja de servicios del torturador Billy el Niño...

No hay otro camino, que organizar la resistencia y que se traduzca en movilización la reorganización política a la izquierda de Podemos. Esas son las tareas de 2021.

Pero donde más grave y patente es el apoyo al régimen, es en el silencio ante la represión con Catalunya, una represión que alcanza a cerca de 3.000 luchadores, y que, en las últimas semanas, se ha agravado con la generalización de la «doctrina Marchena» para aplicar penas de prisión por movilizaciones pacíficas y huelgas generales, con la complicidad de la Generalitat como acusación particular. Y el gobierno PSOE-UP que tenía el compromiso de derogar la ley mordaza, la han aplicado masivamente en los estados de alarma: más de un millón de multas en el primero, 88.000 sólo en Catalunya en los dos meses de este segundo.

2021, se presenta en caída libre en los tres aspectos: 1. lejos aún de dominar la crisis sanitaria; 2. Un PIB en negativo, el fin de los ERTes en enero y un terrible impacto económico que no palian los PGE que hacen depender el gasto de la financiación europea y por tanto de futura deuda que llegará al 123% del PIB y 3. Con la continuidad de la situación de presos y exiliados catalanes, juicios a luchadores y un estado de alarma que se prolongará hasta mayo como mínimo.

Esas políticas de PSOE-UP-IU son las que abren las puertas a la derecha, porque alejan el apoyo de los sectores populares. Y quien más paga el rechazo a esa política, es Podemos, como se vio en las elecciones gallegas y vascas. **No hay otro camino, que organizar la resistencia y que se traduzca en movilización la reorganización política a la izquierda de Podemos. Esas son las tareas de 2021.**

05/01/2021

LI

Lucha Internacionalista 170, enero 2021

La represión en el centro de la agenda

Paremos la nueva ola represiva

Esta nueva ola represiva recorre Europa, a la sombra de la Covid-19. La pandemia es buena excusa, para amparar la ley mordaza de Macron que, parcialmente, ha parado la movilización brutalmente reprimida. También en Grecia, a principios de diciembre, en un acto conmemorativo del asesinato de un compañero a manos de la policía, eran detenidas 80 compañeras de izquierdas, en una manifiesta agresión policial en venganza por la ilegalización de la fascista Alba Dorada, a la que votaban mayoritariamente los cuerpos policiales ... También en España, con ruido de sables y cánticos fascistas en el ejército franquista, acompañando de estado de alarma, toque de queda y ley mordaza aplicada generosamente, profundizando la represión de la primera ola.

En las dos últimas semanas, han caído la sentencia de Adrià Sas a 3,5 años de prisión, la de Garrobo a otros 3,5, la de Dani Gallardo a 4,5 y ayer se aplazó el juicio de Marcel, para el que se piden cerca de seis años. En el caso de Adrià y el de Marcel, con la Generalitat como acusación particular, siendo además determinante para los agravantes en la condena de Adrià. Está por ver si se retirará de la de Marcel, y tampoco se ha comprometido a retirarse del resto, tanto de los represaliados por la lucha nacional como los de las luchas sociales.

Como se dice expresamente en la sentencia de Garrobo, se extiende la «doctrina Marchena» de considerar violencia cuando, no habiéndola, el juez considera -incluso contra los testigos de Mossos- que, por ejemplo los conductores afectados del corte de tráfico de un piquete en un día de huelga general, sufren violencia psicológica. Las

mismas salvajadas que se utilizaron para condenar por el proceso a 100 años, ahora se quieren repetir contra los miles de represaliados de las luchas de resistencia en la calle.

Esta brutal represión, se acompaña de la que se ha generalizado con el estado de alarma y el toque de queda que ha vuelto a dar carta blanca a los Mossos para identificar arbitrariamente y aplicar multas a diestro y siniestro por «desobediencia» aplicando la ley mordaza, bombardeando a multas de 601 euros a los y las compañeras que defiendan todo tipo de causas: desde desahucios, manifestaciones estáticas contra la represión, ... Se endurece la violencia policial en los desahucios, y mientras dejan a cientos de familias en la calle -muchas con criaturas-, hacen de la solidaridad un delito. Llegando a las mayores crueldades con los migrantes, que incluso pagan con la vida la marginación en la que se les mantiene, como recientemente en Badalona. El gobierno, además, pone de manifiesto que las multas serán efectivas, incluso las más que dudosas del primer estado de alarma: para ello ha contratado una multitud de abogados que han cambiado el motivo de desobediencia a infracción de la ley sanitaria -cambiando también la cantidad de 600 a 300-, para cobrar el 30% de las 150.000 que los Mossos pusieron.

El paraguas del estado de alarma, ha sido avalado por todos los partidos excepto VOX, confundiendo las medidas sanita-

rias necesarias para combatir la Covid con el fortalecimiento represivo que necesitan los gobiernos, tanto central como autonómico. Así, el mes pasado, mientras falta personal sanitario, el gobierno de ERC-JXC abría 250 plazas más de Mossos -y Samper, el 16/12/20, reclamaba incrementar la plantilla de los actuales 18.267 a 22.000 efectivos, argumentando que hay menos por cada mil habitantes que en el resto del Estado-, y este mes, 25 guardias más para la unidad antidisturbios de la guardia urbana que Ada Colau decía ir a disolver. Y, así las cosas, la brutalidad policial llega a extremos como el del joven chileno que se saltó el toque de queda la primera semana, o el sintecho baleado por la urbana unos días después ... todo con total impunidad. Por eso fue inadmisible la abstención de la CUP -PR en el voto del estado de alarma, así como la negativa a incluir la lucha contra la represión, el estado de alarma y el toque de queda en las últimas movilizaciones.



En esta espiral represiva, el poder judicial, da una vuelta de tuerca con un Tribunal Supremo que quiere volver a juzgar a Otegui por lo mismo por lo que ya le condenó a 6 años de prisión, aduciendo que los tribunales europeos reconocen que el juicio fue injusto. Ahora el TS dice que como el anterior juicio ha quedado anulado, vuelve a empezar la causa desde el inicio y no tendrá en cuenta nada, tampoco los 6 años de prisión. Pase lo que pase, el mensaje del TS es claro: si contáis en ir a Estrasburgo, tened claro que no tendréis una taza sino dos. Lo refuerza el Constitucional,

considerando delito y no libertad de expresión, la incitación de un sindicalista gallego a quemar la bandera española - que ni se quemó-, y avalando la multa que le habían puesto por «ultraje a la bandera» (artículo 543 del Código Penal). Hacen así patente el menosprecio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en 2018 condenó al Estado español a revocar la sentencia contra dos jóvenes independentistas condenados por quemar la fotografía del rey Juan Carlos, considerándolo libertad de expresión.

jo, ni se ha fortalecido el número de inspectores para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. No, la culpa, en todos los comunicados es de la población, los jóvenes, los ancianos que no quieren estar solos/solas, de las familias que se quieren ver ... La culpa siempre la tiene la gente y hay que castigar, hacerlo con dureza, fomentar la delación entre vecinos y vecinas, reprimir. Más de un millón de denuncias por la Ley Mordaza en el primer estado de alarma en todo el estado.

El poder busca blindarse contra la protesta, porque sabe que la situación de la clase trabajadora está a tope. No se detienen los desahucios, como no se detienen los despidos y cierres de fábricas. Las ayudas no llegan a la gente trabajadora, autónomos o pequeñas tiendas, pero la banca, los fondos buitres y las grandes empresas no han dejado de hacer buenos negocios. El desastre de los recortes y privatizaciones de la sanidad pública demostraron, que los recortes matan. Las residencias donde grandes empresas hicieron grandes negocios han sido una trampa mortal.

Sin la denuncia del giro represivo del gobierno «más progresista de la historia» y «del gobierno independentista», mientras caen las condiciones de vida de la clase obrera catalana, es imposible defender los de-



Se culpabiliza reiteradamente la población, no los poderes públicos por la falta de previsión para fortalecer el sistema público de salud en previsión de la segunda ola, ni la reacción rápida para detectar con tests masivos los focos de infección, tampoco un despliegue de la red de transportes, donde ni siquiera hay el gel hidroalcohólico que se le pide a cualquier tienda, ... tampoco se culpabiliza a la patronal, cuando el 56% de los contagios se producen en los lugares de traba-

¡Retirada de las multas de la ley mordaza!

La primera quincena de diciembre, un compañero nuestro recibió el aviso de una multa por haber participado en una concentración contra la represión el 05/19/2020, en Gràcia (BCN). A pesar de todas las medidas de seguridad sanitarias y el carácter estático de la concentración, un Mosso se dirigió directamente a nuestro compañero, que casi tiene 70 años, y de malas formas lo identificó sin explicar por qué. También habían detenido a una joven e intentado otra, sin que hubiera ninguna alteración del orden público.

La multa, de 601 euros, es por desobediencia, en aplicación de la Ley Mordaza.

El despacho de Benet Salellas nos ha presentado las alegaciones, defendiendo el derecho a reunión y manifestación como derechos fundamentales.

Animamos a los que se encuentren en esta situación a coordinarnos para, juntos, exigir la retirada de estas multas que han proliferado en desahucios y manifestaciones, aplicando la ley mordaza.

¡¡Retirada de multas, hasta que consigamos la derogación de la ley!!

rechos sociales ni el derecho de autodeterminación, ni hacer real que «la crisis la paguen los ricos».

Hay que desenmascarar la escalada represiva y quitarle la pátina de medida sanitaria que se le ha dado con la Covid. Hay que unir las luchas, a menudo muy dispersas: desde las multas, pasando por la libertad y absolución de los y de las denunciadas. Exigiendo que la Generalitat se retire de las acusaciones y que se derogue la ley mordaza:

* ¡¡Basta de represión!!

* ¡¡Absolución sin cargos de Sas, Garrobo, Moises, Dani y Marcel!!

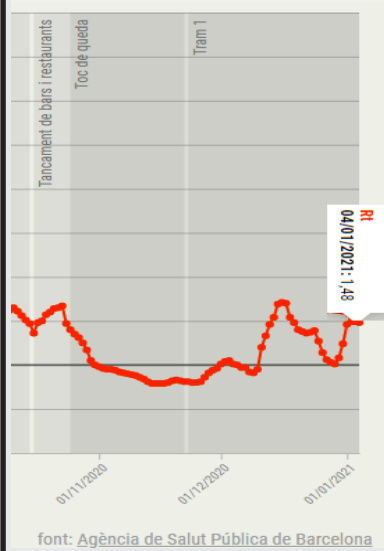
* ¡¡Ni estado de alarma ni toque de queda: retirada de todas las multas a luchadores sociales!!

12/18/2020

LI

Con un estado de alarma con la represión traspasada a las CCAA, y 2 meses después, a 20/12/2020, en Catalunya tenemos:

- * **88.000 denuncias**
- * **1M euros recaudados**
- * **-5% denuncias por violencia de género;** pero en Nochevieja, doble detenciones por ese motivo...
- * ...y el COVID disparado



Educación pública. Catalunya

1er trimestre: un «0» para el Departament d'Educació

La comunidad educativa necesita mejorar en organización y movilización

El primer trimestre del curso finalizaba con un incremento de las restricciones por parte de los Gobiernos, pero sin aumento de recursos humanos y materiales para evitar contagios en los centros educativos ni para garantizar la calidad educativa de estos.

El Departament d'Educació, desde el inicio de este curso, se ha esforzado más en aparentar una falsa normalidad en escuelas e institutos que en aplicar ninguna de las medidas necesarias desde hace meses: ni la reducción de ratios para garantizar las distancias de seguridad en los términos que reconoció el propio Conseller Bargalló, ni el incremento de plantillas para atender el aumento de grupos necesarios, ni la adecuación de espacios suficientes, entre otras muchas.

Y no sólo eso, durante los primeros meses del curso, han ido incumpliendo algunas de las medidas anunciadas a comienzos de éste, generando situaciones insostenibles en muchos centros. No se han cubierto las sustituciones desde el primer día tal como se había prometido. A muchos centros éstas han tardado semanas en llegar generando una pérdida adicional de calidad educativa (sacrificando desdoblamientos, tutorías, apoyos de educación especial ...).

La falta de recursos en sanidad también ha repercutido en los centros educativos ya que, en muchos casos, se han incumplido los protocolos y no se han hecho PCR's a profesorado en contacto estrecho con

casos positivos en los centros o no se han confinado grupos, aún y teniendo casos positivos. En algunos casos, no se han hecho confinamientos de grupo por lo que habían tardado en hacer la PCR y tener los resultados. No dieron las mascarillas FFP2 exigidas y la compra de geles hidroalcohólicos



está yendo a cargo de los mismos centros, generando en muchos casos unos gastos que limitan seriamente la economía de las escuelas e institutos.

Se han tenido que aplazar a medias unas oposiciones esperpénticas mientras siguen sin optar por la estabilización del personal interino mediante un concurso de méritos basado en la antigüedad que, además de ser más justo, no supondría el trastorno que está suponiendo a los centros el actual sistema de oposiciones, ni los riesgos que generan las actuales convocatorias para hacer pruebas, presentar programaciones, etc.

Y ahora, una vez acabado el trimestre, nos encontramos que muchas compañeras y compañeros que son colectivo de riesgo ante la Covid deberán volver a los centros en enero. Y como «agradecimiento» a las docentes que las han sustituido, el De-

partamento las ha dado de baja el último día del primer trimestre y no han podido cobrar las vacaciones de Navidad.

Pero que el Departament d'Educació haya podido actuar impunemente con este desprecio hacia la educación pública, ha sido posible por la falta de respuesta que ha habido por parte de trabajadoras y comunidad educativa. A las llamadas a la huelga que se han hecho desde CGT Enseñanza desde finales del curso pasado sólo el sindicato Aspepc se añadió para convocar las huelgas del 9 y 15 de octubre que tuvieron poco seguimiento. Las Universidades también fueron a la huelga el 21 de octubre, pero sin gran seguimiento ni continuidad. Y tampoco ha habido respuesta suficiente por parte del conjunto de la comunidad educativa. Sólo la concentración convocada por la *Asamblea Groga* que reunió a unas 200 personas el pasado 12 de diciembre.

Así, la asignatura pendiente para lo que resta de curso para trabajadores, estudiantes y familias es sin duda organizar una respuesta a la altura de la gravedad de la situación y para exigir los recursos inmediatos necesarios para unos centros educativos abiertos y seguros este curso y un incremento de presupuesto exponencial para el siguiente, que revierta todos los recortes que aún sufre la educación pública y también todos los meses perdidos por la falta de recursos durante la pandemia.

*Pedro Mercadé
Delegado
de educación pública*

Hay que unir las luchas, también las de los servicios públicos

La receta de los Gobiernos de aquí y de allá para hacer frente a la pandemia está siendo la misma: muchas restricciones, pero muy pocos recursos. Y, en el caso de los servicios públicos, lo mismo: aplausos a las trabajadoras mientras se las deja a los pies de los caballos con la falta de personal y unos servicios públicos al borde del colapso mientras se siguen financiando empresas privadas que hacen negocio con las necesidades vitales de la gente.

La primera ola de la Covid-19 hizo aún más evidente lo que ya lo era: un sistema sanitario 100x100 público y con suficiente financiación es literalmente cuestión de vida o muerte. La escandalosa gestión de las residencias privadas o las UCIs públicas desbordadas mientras sobran camas en la privada son sólo dos ejemplos de que la prioridad de los Gobiernos no es, por mucho que digan lo contrario, la vida de la gente sino los beneficios privados. Y así lo han seguido demostrando a lo largo de estos meses. No se ha aumentado el personal sanitario ni educativo del sistema público, se ha seguido pagando con dinero de todos a empresas privadas que han gestionado de forma nefasta servicios sociales básicos como las residencias, el SAD, los rastreos por parte de Ferrovial, etc. Todo esto, mientras los esperados fondos europeos apuntan a las grandes empresas y los quieren condicionar a más recortes de servicios públicos y pensiones.

Sí ha habido respuestas a estos ataques a los servicios esenciales: la huelga indefinida de los MIR, concentraciones por parte de Sanitarias en Lucha y las trabajadoras del Hospital Clínico, paros parciales en Bellvitge, movilizaciones de las trabajadoras del SAD y otros servicios sociales o las huelgas en la educación pública de octubre, entre otras. Pero no ha habido la

respuesta conjunta ante un ataque que es hacia el conjunto de los servicios públicos y de los y las trabajadoras.

Las movilizaciones parciales pueden lograr mejoras puntuales para el sector o centro de trabajo que se moviliza. Pero lo que hace falta en la actual situación, es un giro de 180 grados en las políticas de los Gobiernos para poder tener unos servicios públicos suficientes financiados en su conjunto. Esto pasa por dejar de financiar a las empresas privadas que hacen negocio con la salud, los servicios sociales y la educación y también para intervenir y expropiar todas las que sean necesarias para garantizar estos servicios básicos. Y pasa también por un Plan de Choque social y suficiente, el dinero para el cual podría salir de lo que se paga a los bancos en concepto de deuda pública o de un aumento real de impuestos a los que más tienen, entre otros.

Y como la solución pasa por un cambio de políticas de conjunto, nuestra respuesta debe avanzar en este sentido: **unir las luchas de las trabajadoras y usuarias de los servicios públicos y organizar un plan de lucha conjunto con exigencias conjuntas. En este sentido, desde Lucha Internacionalista estamos planteando a la Plataforma en Defensa de los Servicios una movilización de estas características en enero, que deberá tener continuidad en forma de plan de lucha durante los próximos meses si queremos salir de esta crisis con unos servicios públicos suficientes y que sean los capitalistas y no las trabajadoras quienes sufran los próximos recortes que vendrán.**

*Pedro Mercadé
Delegado de educación pública*

Unamos la lucha de las estudiantes y de las trabajadoras

Algunas compañeras y compañeros participan de espacios de organización en el seno del movimiento estudiantil o de la lucha contra la precarización de las trabajadoras en la universidad. Nuestro objetivo ha sido siempre el de unir las luchas de trabajadoras y estudiantes porque creemos que es justamente desde una perspectiva de clase que podemos dar respuesta a dos caras de la misma moneda: la precarización a que se ve sometido el sistema educativo y las condiciones de trabajo y los sueldos de miseria con que se encuentran las estudiantes cuando acceden, si pueden, en el mundo laboral.

minución de los sueldos. El desmantelamiento industrial que ha sufrido Catalunya el último año, con la destrucción de miles de puestos de trabajo productivos, es uno de los casos más claros de este deterioro.

Un ejemplo evidente en que la precarización ha ido de la mano del aumento de la temporalidad lo encontramos en las mismas universidades públicas. En la ley 4/2007 de 12 de abril, se remarcaba que «El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no podrá superar el 40 por ciento de la plantilla docente.» Esta ley

sor asociado. Este último sobrevive a base de contratos temporales y salarios bajos, y a menudo asumiendo tareas de docencia que no le corresponden.

También hay que poner de relieve como el sistema universitario explota y se aprovecha de las trabajadoras más jóvenes como las investigadoras predoctorales. Los contratos predoctorales, según el Real Decreto aprobado en marzo de 2019, tienen que tener una duración de 4 años y, todavía ahora, hay universidades que los mantienen de 3 años², forzando las investigadoras a tener que elegir entre acabar sus investigaciones desde el paro o abandonar los proyectos con que llevan años trabajando y, por lo tanto, renunciar a la obtención del título de doctor/a. Esta realidad pone de manifiesto el futuro inestable, precario y devastador que espera a las estudiantes al acabar la carrera.



A lo largo de este último año, la pandemia del Covid-19 solo ha hecho que acelerar la profundización de la crisis económica de 2008. Una crisis de la cual nunca hemos llegado a salir, en parte, porque la recuperación económica de que tanto se ha hablado ha sido ficticia. La disminución del paro se ha dado a expensas de la precarización de los contratos laborales y la dis-

es hoy en día incumplida por más de 12 comunidades autónomas, entre las cuales Catalunya¹. El mismo proceso de destrucción de puestos de trabajo con condiciones dignas en el ámbito industrial (ganadas a pulso durante años de lucha) se está dando en la Universidad, donde cada vez más se sustituye la figura de profesor contratado por la de profe-

La división entre las luchas es una victoria directa de los agentes precarizadores. Por eso es hoy más necesario que nunca revertir las dinámicas corporativistas y sectarias. Tenemos que entender que los beneficios y victorias de las trabajadoras lo son también de los estudiantes y viceversa. Que unos profesores predoctorales con condiciones dignas nos darán mejores clases y que una educación pública y de calidad beneficia al conjunto de la clase trabajadora.

Por este motivo necesitamos dar un paso adelante y generar vínculos entre las lu-

(sigue en pág. 20)

El incendio del Gorg (Badalona - BCN)

Más muertes por la ley de extranjería

El pasado 9 de diciembre las llamas acabaron con la vida de cuatro personas directamente y desencadenaron la muerte de Boubacar Hanne, muerto después de haber estado hospitalizado, por fallo respiratorio. Estos acontecimientos son consecuencia de un sistema capitalista racista, que vulnera todos los derechos de las personas migradas. Derechos que han negado todas las instituciones, municipales, autonómicas y estatales: derecho a una vivienda, derecho a la sanidad, o derecho a un trabajo. Son cómplices por acción u omisión. El Ayuntamiento de Badalona y su alcalde Albiol por promover los discursos de odio y xenofobia o negar el derecho al padrón o a la atención social. La Generalitat, por falta de políticas que garanticen el derecho a la vivienda. El Estado Español, por negarse a regularizar a las personas migradas, incluso en medio de una pandemia. A la Unión Europea, por la política migratoria que empuja a las personas a la clandestinidad y precariedad, obligándolas a padecer explotación laboral, con la constante amenaza de la deportación.

Como consecuencia del incendio, los y las habitantes de la nave quedaron en la calle sin techo, sin enseres o sin documentos, todo consumido por las llamas. Acorralados en el techo de la nave, algunos saltaron al vacío, otras esperaron durante horas el rescate de los bomberos, todos y todas quedaron traumatizadas por la terrible experiencia.

Después de pasar una noche durmiendo en la calle, decidieron acampar en la Rambla del Gorg (una vía pública peatonal). Con la colaboración de personas y colectivos se organizó una red de apoyo a los y las afecta-

das, que les proporcionó alimentos, ropa o tiendas de campaña. La Generalitat aprobó una partida especial de ayuda económica. Pero desde el ayuntamiento solo se ofreció una solución temporal de alojamiento, media pensión y la dispersión por Barcelona de todo el grupo. La mayoría no aceptaron las condiciones, por tener trabajos en Badalona, por no romper el grupo o por ser una solución temporal.

Después de veinte días en la Rambla, decidieron volver al solar de la nave quemada. Cuando realizaban el traslado al solar, un grupo de policías locales intentó cerrarles el acceso al espacio sin conseguirlo.

Así empieza una nueva fase de la lucha, donde será necesaria la unidad de todas las personas afectadas y de los colectivos que las apoyan para fijar unos objetivos claros y organi-



Se han realizado manifestaciones, concentraciones y declaraciones pidiendo una solución duradera en el tiempo, con regularización administrativa y obtención de papeles, así como la repatriación de los fallecidos a sus países de origen con sus familias. Pero la respuesta del Ayuntamiento de Albiol, fue levantar bulos racistas con acusaciones de violencia y conductas incívicas además de pedir una orden judicial para desalojar la acampada del Gorg.

zar la respuesta al Ayuntamiento, a la Generalitat o al gobierno Sánchez-Iglesias.

La Ley de Extranjería mata personas, en las aguas del estrecho o en las de Canarias, pero también en el campo recogiendo fruta o en las infraviviendas a las que se ven obligados a vivir miles de migrantes.

**Fuera la Ley de Extranjería.
Las vidas migrantes importan.
Las vidas negras importan**

*Txema Morillo.
Militante de Ll. Badalona*

Vilafranca del Penedès. Migrantes

El padrón, un derecho universal

Periódicamente, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya nos recuerda a través de los medios de comunicación que somos 7,5 millones de personas, 7,5 millones de futuros. Nosotros, con más periodicidad que ellos nos hacemos la misma pregunta: ¿Estamos todas las personas que realmente vivimos en Cataluña comprendidas en éstos 7,5 millones de futuros? Y con la misma periodicidad que preguntamos nos respondemos: ¡¡No, no estamos todas!!

Y es que, desdichadamente existen ayuntamientos en nuestro territorio que no quieren empadronar a aquellas personas o familias que no dispongan de un título de propiedad o de alquiler, que no dispongan de una cuenta bancaria o que no puedan acreditar el pago de los suministros básicos. El hecho de no querer empadronar a las personas priva a éstas de recibir la atención de los servicios más elementales que les permitan vivir dignamente. Así, se les niega la tarjeta sanitaria y el derecho a la asistencia médica, el derecho a ser atendidos por los servicios sociales, el derecho a la escolarización de sus hijos o el derecho a un trabajo digno. Se precariza así la vida de muchas personas, obligándolas a vivir y a trabajar semiclandestinemente, con miedo constante y sin ningún derecho.

El ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, gobernado por el PDECAT y el PSC es uno de estos ayuntamientos que ha manifestado públicamente que no quiere empadronar a ninguna persona que se encuentre ocupando ilegalmente una vivienda. Antepone así la propiedad privada al derecho a la vida de las personas, criminalizando al mismo tiempo todo tipo de ocupación, especialmente aquella que es llevada a cabo debido a la pobreza extrema y cronicada existente en nuestra sociedad.

Contraviene de esta forma las normativas legales existentes como pueden ser la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local que en su artículo 15 dice «Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente». También, como recordó el Síndic de Greuges en su informe al Parlamento en 2017 «La decisión sobre la inscripción se ha de basar en la residencia efectiva en el domicilio, no en la posesión de un título de propiedad, aspecto al que hace mención el artículo 59.2 del R.D. 1690/1986»

Del segundo, que ha comportado concentraciones todos los lunes durante más de dos meses y ha incluido ruedas de prensa, lectura de manifiestos o identificaciones por parte de los Mossos d'Esquadra, hemos conseguido además del eco mediático, el reconocimiento, junto otras entidades, como movimiento social arraigado en la ciudad. Un ejemplo de este arraigo lo representa la lectura del manifiesto que leímos el día 7 de noviembre exigiendo el padrón y una vivienda digna para todas las personas, dentro de los actos organizados por Òmnium Cultural y los músicos por la libertad.



En el *Sindicat de Llogateres de Vilafranca* estamos tratando esta problemática trabajando en dos frentes. Uno es el frente institucional i el otro el de la presión y las movilizaciones en la calle. Del primero hemos conseguido calendarizar encuentros con el concejal de Bienestar Social con el fin de abordar las problemáticas más urgentes en la ciudad y su solución. Estas problemáticas tienen una incidencia más grande en familias de origen extracomunitario, con hijos menores de edad y con trabajos muy precarios, cuando no inexistentes.

Libertad y derechos de las personas que somos conscientes que únicamente las haremos efectivas llevando las luchas a la calle de una forma coordinada y decidida. El futuro es nuestro. Continuamos en la lucha.

**¡¡Ninguna persona es ilegal!!
¡¡Padrón para todos!!**

José Antonio Barberà Molina

Militante del *Sindicat de Llogateres de Vilafranca* y de *Lucha Internacionalista*

Girona

Hamza, no te olvidamos. DGAIA responsable

El 28 de diciembre fuimos llamados por el *Espai Antiracista Salt-Girona* y la *Plataforma Girona Acull* a un acto en la calle, de denuncia y despedida ante la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Girona por la muerte del joven de 19 años Hamza Iouazgui.

Hamza Iouazgui, nacido en Tánger y que cruzó en patera el Estrecho de Gibraltar, era un exmenor extranjero no acompañado que se suicidó la semana pasada. Más de 300 personas nos concentramos para despedirnos de él con toda la dignidad y señalando a los responsables de su muerte.

Como dice el manifiesto, el sistema de acogida de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) sigue destrozando vidas, empujando jóvenes a la calle, haciéndoles perder la esperanza después de haber hecho un muy peligroso viaje para su vida, y a Hamza le ha llevado hasta la muerte. El caso de Hamza no es el único, pero es extremo, y por

eso se pone más en evidencia un sistema de protección que muy a menudo no protege. Muchos jóvenes tienen que hacer un largo recorrido por centros de menores, y en concreto a Hamza, los informes coincidían en que requería un recurso habitacional, con un seguimiento educativo y tratamiento médico pues sufría ansiedad, y fue expulsado a la calle, debiéndose buscar la vida buscando protección que le prestaban amigos, compañeros y personas solidarias, hasta que esto ha sido insuficiente de manera irreversible.

La responsabilidad de la DGAIA y la política de la Generalitat, así como la complicidad de las empresas y la desatención de algunos ayuntamientos, no pueden quedar impunes. El contexto real es que se expulsa a los jóvenes



de sus centros sin ninguna perspectiva de vida, se les echa a la calle sin tener las herramientas necesarias para su autonomía y con la dificultad de un contexto racista como el que se está viviendo. Muchos jóvenes, amigos y amigas suyos en la concentración, denunciaron el caso, dedicaron unas palabras de despedida y de apoyo a su familia y relataron sus experiencias de cómo se sienten olvidados cuando cumplen los 18 años.

Desde Lucha Internacionalista damos total apoyo a la lucha para conseguir recursos adecuados a las necesidades de cada joven. Como bien dicen en el manifiesto «no pedimos nada que no necesitamos todas y a que no tengamos derecho todas: pan, techo, papeles, trabajo y ningún joven en la calle». Y como se visualizó en el acto con las pancartas que llevaban: «Hamza, no te olvidaremos» y «DGAIA responsable».

Lucha Internacionalista-
Girona



Diari de Girona 29/12/2020

La CUP en la encrucijada

El 30 de diciembre se firmaba un acuerdo político para la presentación de la candidatura CUP-*Un nou cycle per guanyar*. Los 12 puntos del programa definen una candidatura que mantiene la doble ruptura con el régimen y con el sistema capitalista desde una política de independencia de clase.

La CUP-CC, ahora con *Guanyem*, está ante una encrucijada: o acaba siendo la pata izquierda del bloque burgués catalán, es decir, a remolque de ERC y JXC, o se construye como una alternativa de la clase obrera y los sectores populares que permita avanzar hacia la república catalana en ruptura con el régimen del 78 y en defensa de los derechos sociales contra el capitalismo. El programa de los 12 puntos apuesta por esta segunda opción.



Semanas antes se habían cerrado las listas. Lucha Internacionalista decidimos no participar. Aún no había un acuerdo político firmado y los primeros documentos presagiaban un giro a la derecha. Se presentaba públicamente el acuerdo bilateral CUP - *Guanyem*, eclipsando al resto de organizaciones. La cabeza de lista, la exalcaldesa de Badalona Dolors Sabater,

hacía declaraciones públicas ofreciéndose a entrar en el gobierno, y se difundían vídeos pre-electorales con el lema «estamos preparados». Otros dirigentes de la CUP secundaban la oferta de participar del gobierno de la Generalitat. Rápidamente Pere Aragonés llamaba a la conformación de un gobierno con ERC como eje, con JXC, la CUP y los Comunes. La lista encabezada por Sabater se había cerrado desde arriba, impidiendo que fuera el voto de la base quien decide el orden de los y las candidatas: forzaba a votar a favor o en contra una lista cerrada de 9 para BCN. El resultado del *Consell Polític* de la CUP sobre el acuerdo bilateral con *Guanyem* -33 votos a favor, 26 en contra- demostraba las importantes dudas que se estaban generando también dentro de la CUP.

Es absolutamente imposible hacer efectivo el punto 1 del acuerdo, que asegura la independencia política y una clara delimitación con ERC y JXC, con entrar en el gobierno de la Generalitat o un pacto de legislatura. Y será aún más evidente ante el agravamiento brutal de la situación de la clase obrera y sectores populares en esta grave situación sanitaria y económica.

ERC y JXC (y otras variantes ex convergentes) a lo largo de más de una década han recortado y privatizado la sanidad y demás sectores públicos (educación, servicios, sociales, residencias ...), aunque ahora con contratos escandalosos como el de los rastreadores de Ferrovial. El mismo gobierno que permite el desmantelamiento industrial con cierres y cientos de despidos. Al igual que el gobierno español del PSOE-Unidas Podemos, pone por delante los in-

tereses del Ixex a la gente trabajadora o el pequeño comercio y la restauración. Prioriza los beneficios de los propietarios a los inquilinos y ha multiplicado



los desahucios, con cientos de familias en la calle en plena pandemia y en el frío del invierno. El mismo Gobierno que aumenta la represión sobre la protesta, que mientras dice rechazar la criminalización contra el *procés*, presenta la Generalitat como acusación contra compañeros/as represaliadas con prisión, y persigue con multas y la Ley Mordaza la disidencia. Y con ERC, que entrega el 1 y el 3 de octubre a la obediencia autonómica de la mano del PSOE.

Los argumentos para un hipotético pacto de gobierno, repetirían los de Pablo Iglesias cuando entró en el gobierno del PSOE: la política del posibilismo. Rascar alguna migaja mientras se aplican las grandes políticas neoliberales: medidas de protección de la banca y la patronal, aumento del presupuesto para la Casa Real o el ejército ... y ahora votar a favor de las propuestas del Pacto de Toledo por la reducción y privatización de las pensiones. ¿No basta con la experiencia de Syriza, o la de los «ayuntamientos del cambio»? Como le ha pasado a Podemos (destrozado en las

guanyar (un nuevo ciclo para ganar)

nda

elecciones gallegas y vascas), la entrada o un pacto de gobierno, serían un punto de inflexión y no retorno para la CUP.

Dar esta batalla por perdida antes de empezarla o a la primera de cambio -como hizo primero *Corrent Roig* (CR) y ahora la *Corrent Revolucionària dels Treballadors* (CRT)- es sectario con cientos de luchadoras y luchadores de la CUP y las otras organizaciones de la candidatura, que honestamente luchan por una república catalana y por el socialismo. No sobran fuerzas para enfrentar el sistema y el régimen y una política revolucionaria exige luchar hasta el final para no perder. La CRT habla de la necesidad de un frente-y nosotros lo compartimos-, pero no es suficiente en hacer propaganda: hay que trabajar por el agrupamiento más amplio posible sobre un programa de ruptura con la monarquía y el capitalismo. Es desde esta lucha que impulsamos *Iniciativa Internacionalista* en las elecciones europeas, *Des de Baix* en las autonómicas, CUP-AE, CUP-CC, CUP-PR, agrupamientos de los que no participó CRT.

Esta candidatura no es la coalición de fuerzas de izquierdas que requiere el momento que vivimos. Se precisaba una unidad más amplia: con la CUP y la *Esquerra Independentista*, *Lucha Internacionalista*, *Piratas*, *Constituents per la Ruptura* y la *Crida Constituent*, incorporando *Anticapitalistes* -tras la ruptura con *Podemos-Comuns-*, CRT y *Corriente Roja*. Pensamos que el acuerdo era posible con lo firma-

do. Las elecciones sólo son un momento, la lucha de clases no tiene tregua, y esta confluencia seguirá siendo necesaria después de las elecciones.

Hemos dado la batalla por los 12 puntos que propusimos como base programática desde hace meses y, con las incorporaciones presentadas por otras organizaciones, hoy son la base política del acuerdo de la candidatura. Creemos que ha sido un paso adelante. Lucharemos para que sean los pilares de la acción política y arrinconen discursos oportunistas y electoralistas.



Desde aquí hacemos un llamamiento a todos y todas las militantes de la CUP para que no caigan en la trampa de la política «posible», del discurso de Colau, Bildu o Podemos. Nos tomamos este combate como un compromiso con los que hemos recorrido estos últimos 8 años. Con todas estas alertas, en las próximas elecciones al Parlamento de Catalunya, *Lucha Internacionalista* llamamos a votar la candidatura *CUP-un nou cycle per guanyar*.

5/01/2021



La candidatura *Corrent Roig-ARA*

Corrent Roig presenta la coalición electoral *Candidatura de les Represaliades*, junto con la *Asamblea de Represaliades y Activistas* (ARA), para la *lucha contra la represión y por las libertades que defiende un plan de choque*. Compartimos que esta lucha es central y así está recogida en los 12 puntos del acuerdo. No creemos que se justifique una nueva candidatura, menos sin haber intentado buscar una plataforma unitaria y con demasiados tics de oportunismo electoralista.

La utilización de las siglas CDR (*Candidatura de les Represaliades*) que acompañó la candidatura al inicio, ha provocado una reacción de rechazo e indignación en el seno de los CDRs, por pretender apropiarse de las siglas. Es especialmente grave, porque estos han sido los organismos más vivos que dieron el 1 y el 3 de octubre del 17, y la continuidad de la lucha pasa por recuperarlos.

En la lucha contra la represión y por las libertades construimos unitariamente la *Plataforma 03 d'octubre*, que convocó la huelga general de octubre de 2017 y ha impulsado múltiples iniciativas antirrepresivas. Ni ARA ni CR participan. Tampoco en la *Plataforma por un Plan de choque*. Así pues, si no dan esta lucha en los marcos unitarios, no se entiende que se tomen las mismas referencias para la campaña electoral. La candidatura CR critica la política poco clara de la CUP respecto de ERC y JXC, pero es poco fiable la crítica cuando el cabeza de lista de la candidatura, Roger Español, iba como cabeza de lista al senado con JXC.

CUP EN ENCRUCIJADA

Acuerdo político para la confluencia

Ejes programáticos Básicos

Las organizaciones comprometidas con este acuerdo para conformar una confluencia hacia una candidatura electoral compartida, establecemos estos ejes programáticos básicos para trabajar y desarrollar nuestra acción política durante la próxima legislatura:

1. Para hacer efectiva la República de los Países Catalans. Mantener la acción política para la Autodeterminación y la Independencia como única forma para construir una república que ponga la vida en el centro desde la plena soberanía. Ruptura con el marco jurídico y político estatal dominado por la oligarquía representada por la monarquía borbónica y la Constitución española de 1978. Lucha contra la corrupción sistémica. Sin renunciar a los valores democráticos y de diálogo que ha seguido el *procés*, sabemos que la implementación efectiva de la república no vendrá de unas negociaciones imposibles con el estado para que reconozca el derecho de autodeterminación, sino mediante la construcción de las mayorías obreras y populares y su movilización sostenida contra el estado. Conquistar estas mayorías por la república catalana implica darle un fuerte contenido social y anticapitalista, lo que obliga a una política de independencia de clase opuesta a la que ERC y JXC han venido reiteradamente aplicando.

2. Contra la represión. Amnistía para las cerca de 3.000 luchadoras represaliadas. Por la derogación de la Ley Mordaza, la disolución de la Audiencia Nacional y la expulsión del ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional de los Países Catalans. Disolución de la BRIMO. Reforma completa de la estructura judicial y trabajar por un nuevo modelo de seguridad. Retirada de todos los

cargos puestos por la Generalitat contra luchadores/as.

3. En favor de las clases populares, contra las desigualdades: PAN.

Un plan de choque ante la actual situación de emergencia que incluya la nacionalización y control público y democrático de los sectores estratégicos y de las grandes empresas de servicios básicos, e intervención pública de los precios de los bienes esenciales (alimentación, vivienda, higiene, salud, educación...) y de los suministros básicos (agua, electricidad y gas).

4. En favor de las clases populares, contra las desigualdades: TECHO.

Un plan de choque ante la actual situación de emergencia que incluya medidas para detener los desahucios y los cortes de suministro. Aplicación inmediata, como mínimo, de la ley de regulación de los alquileres, y expropiación de pisos vacíos en manos de grandes tenedores sin indemnización, para formar un parque de vivienda pública de alquiler.

5. En favor de las clases populares, contra las desigualdades: TRABAJO.

Nos oponemos a la destrucción de nuestro tejido productivo, que nos lleva a la dependencia y la precarización de los y las trabajadoras. Prohibición de despidos, llegando a la nacionalización bajo control democrático por parte de los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas que pretenden cerrar, orientando la producción a resolver las necesidades sociales de manera sostenible y dando forma a un tejido productivo ecológico y respetuoso del medio. Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial para acabar con el paro. Contra cualquier discriminación salarial. En defensa de salarios y pensiones habrá que abordar la derogación de las leyes surgidas del actual marco jurídico político, entre las que

las leyes de reforma laboral y el Pacto de Toledo y la reforma de las pensiones, que fomentan la actual precariedad de los y de las trabajadoras.

6. Recuperación de la gestión y titularidad directa y pública de los servicios públicos. Poniendo la vida por delante del capital, revertir los recortes y privatizaciones.

a. Implementación de un sistema sociosanitario de gestión, titularidad y control 100% público.

Recuperación de titularidad, gestión y provisión de todos los centros del SISCAT (Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya). Personal y recursos en hospitales y atención primaria: estabilidad y dignificación de los sueldos. Garantizando los recursos necesarios a trabajadoras y usuarias, así como los recursos farmacéuticos esenciales. Sanidad universal sin restricción, e incluido el derecho al aborto.

b. Por una educación pública, gratuita y de calidad, con el profesorado y los recursos económicos necesarios. Supresión de conciertos educativos.

c. Gestión pública directa de la atención social, basta de subcontratas y externalizaciones.

Titularidad y gestión pública de las residencias de ancianos.

7. Por la soberanía económica.

Derogación del artículo 135 CE y de la LRSAL y demás leyes de austeridad, que priorizan el pago de la deuda, para liberar recursos e invertirlos en sanidad pública, toda la red sociosanitaria y servicios sociales, con el objetivo de paliar los efectos del Covid19, reforzando también la respuesta desde el conjunto de municipios de los Países Catalans. No al pago de la deuda. En esta situación de emergencia social hay que apostar por la





renta básica universal para garantizar el sostenimiento de las personas más vulnerables. Contra la corrupción y el fraude fiscal, contra el control financiero y especulativo de la actividad económica, por una fiscalidad gualadora al servicio del trabajo, luchando por un nuevo modelo de relaciones sociales y económicas socialista, que tenga como objetivo construir las necesidades del pueblo. Nacionalización de la banca. Una banca pública al servicio de la sociedad.

8. «Salvemos el planeta, aplastemos el capitalismo», porque uno lleva al otro también en nuestro país.

- Soberanía alimentaria, banco público de semillas y suelos, control de precios.
- En defensa del territorio, nacionalización de peajes y detener la privatización de infraestructuras.
- Por una transición energética hacia un modelo público, diversificado, ecológico y sostenible.
- Por una nueva movilidad, red de transporte público ecológico, control de flujos turísticos y reducción de emisiones de aviones y cruceros.

9. Fortalecer el antirracismo. Plenos derechos políticos, económicos, sociales y de género de las personas migrantes, regularizando todas las personas migradas y garantizando igualdad de trato y un acceso justo a los servicios públicos, con el consecuente impulso de la derogación de la ley de extranjería. Cierre de los CIES.

10. Construir una sociedad no patriarcal. Una sociedad sin desigualdades entre hombres y mujeres, ni discriminaciones por motivos de opción sexual, identidad o expresión de género. Garantizar el derecho al aborto libre y gratuito y desarrollar medidas inmediatas para detener las violencias contra las mujeres, el reconocimiento del trabajo de cuidados con servicios públicos de calidad y aplicación en todos los ámbitos de políticas feministas y de liberación lésbico, gay, bisexual, intersexual y transexual. Ni precariedad ni feminicidios.

11. Por una Europa solidaria de trabajadoras y de pueblos libres. Una Europa que supere las estructuras de dominación política, económica y militar actuales de la UE, el BCE/FMI/BM y la OTAN. Solidaridad internacionalista contra el imperialismo. Buscaremos la relación con aquellas organizaciones con quienes compartimos estos objetivos.

12. Establecer un código ético de la candidatura. La candidatura no se endeudará con ninguna entidad financiera y ejercerá una transparencia máxima en relación a sus cuentas. Sus representantes actuarán de acuerdo con unos principios éticos que no permitan la utilización de la política como carrera personal e individual en beneficio propio ni la concentración de cargos y se les podrá revocar en cualquier momento. Tanto las personas electas como las liberadas cobrarán unos ingresos mensuales de acuerdo con lo que establece el código ético. Las personas que participarán de la plataforma electoral compartida en los diferentes espacios de trabajo se comprometen a ser fieles con el código ético compartido.

30/12/2020

Arran, Constituents per la Ruptura, Crida Constituent, CUP, Endavant OSAN, Guanyem, La Forja, Lluita Internacionalista, Pirates, Poble Lliure, SEPC.

Nuestros compromisos

En el marco de los ejes progra-máticos acordados por las diferentes organizaciones que impulsamos este acuerdo para conformar una confluencia hacia una candidatura electoral plural, adoptamos los siguientes compromisos de trabajo y estrategias compartidas:

- Nos comprometemos a impulsar todas aquellas políticas para generar los cambios sociales necesarios para hacer posible las transformaciones que defendemos en los Països Catalans. Esto incluye: impulso de medidas de Plan de Choque para hacer frente a la emergencia social ante la crisis de la Covid-19, el impulso de nuevas leyes o la modificación de las existentes; el impulso de medidas que sobrepasen los límites competenciales existentes y la definición de estrategias conjuntas con el movimiento popular para hacerlas efectivas. Nos responsabilizamos, por tanto, en liderar y garantizar la ejecución de estos cambios, tanto desde dentro las instituciones como desde fuera.

- Nos comprometemos a trabajar para generar las condiciones óptimas para hacer efectiva una ruptura con el estado español en nuestro camino hacia la independencia. Necesitamos volver a coger la iniciativa en la confrontación con el estado para defender nuestros derechos y libertades como pueblo. En la próxima legislatura, no renunciamos a un nuevo referéndum, partiendo de la experiencia conseguida en los sucesivos embates de los últimos tiempos, y nos comprometemos a trabajar para fortalecer las herramientas de poder popular necesarias que nos permitan recuperar el momento político alcanzado el 1 y el 3 de octubre de 2017. y, sobre todo, a sostenerlo.

- Nos comprometemos a trabajar por la amnistía, y dotarnos de las herramientas antirepresivas necesarias para sostener una lucha continuada por los derechos y libertades de nuestro pueblo ante el fascismo de estado y de calle.

- Nos comprometemos, a situar el conflicto nacional de los Països Catalans en el terreno internacional porque nos será necesaria la intervención de los y las trabajadoras y pueblos a nivel internacional, debido al carácter antidemocrático de los estados español y francés, de cara a generar un marco resolutivo del conflicto nacional.

Del acuerdo PSOE/Unidas-Podemos 2020, a los PGE 2021

2020 ha sido el primer año de gobierno del PSOE-Unidas/Podemos. Al empezar 2021 es hora de hacer un balance de la acción del gobierno respecto a las pensiones.

El acuerdo de gobierno PSOE-Unidas/Podemos

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas/Podemos sobre pensiones llevaba incluida una enorme contradicción entre las buenas intenciones «*Garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones*» y «*Garantizar su sostenibilidad (de la Seguridad Social) a medio y largo plazo*»(1) y el instrumento para realizarlas, un nuevo Pacto de Toledo.

¿Cómo se puede garantizar las pensiones dignas y la sostenibilidad de la Seguridad Social con un nuevo Pacto de Toledo, si precisamente el objetivo de éste, desde el inicio, es todo lo contrario?: ¡Desmantelarla! La política sobre pensiones del nuevo gobierno

empezaba con esa grave contradicción que anunciaba lo que ha sido la pauta del pasado año. Su balance no puede ser peor:

- La continuación de las reformas de las pensiones de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, excepto en aquellos aspectos que el movimiento pensionista consiguió paralizar, aunque no anular definitivamente (incremento anual IPC, Factor de sostenibilidad)

- La aprobación, en el mes de diciembre, del nuevo Pacto de Toledo, por el Congreso de Diputados. Se abstuvieron ERC y EH Bildu y solo la CUP votó en contra. El nuevo pacto va exactamente en la línea contraria de las «buenas intenciones» del Acuerdo de gobierno.

A finales de año, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que Podemos no apoyará la propuesta del ministro Escrivá de pasar de 25 a 35 los años necesarios para cal-

cular la pensión de los futuros jubilados y lo justifica afirmando que esta propuesta no se encuentra ni en el nuevo Pacto de Toledo ni en el acuerdo de gobierno. También afirmó que «*Ampliar el periodo de cotización a 35 años es un recorte en las pensiones públicas*» (2).

Se hace difícil creer en los cambios de criterio de los que apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, como UP y ahora, por estrategia política, se oponen a alargar a 35 los años necesarios para calcular el importe de la pensión, pero no se opusieron a pasar de 15 a 25 años, que ya es por sí lesiva.

La política del gobierno sobre pensiones para el 2021

Las declaraciones Yolanda Díaz muestran ciertamente las divisiones dentro del gobierno sobre este tema (y sobre otros como el SMI), pero también el intento de desviar la atención sobre los problemas que continuarán afectando a las pensiones este año. Entre ellos, hay que destacar algunos:

- **El mantenimiento de la brecha de género.** En el mes de diciembre de 2020, la pensión media de las mujeres fue de 816,08 y la de los hombres 1.236,85 euros (3). Una diferencia de 420,77 euros. En 2021 no hay ningún cambio previsto.

- **El impulso de los Planes privados de empresa.** La creación de un Fondo público para planes colectivos de empresa y el aumento de las desgravaciones que pasan de los 8.000 euros actuales a los 10.000 euros. (4)



· **Las condiciones de los Fondos Covid UE.** Todos los ministros y ministras del gobierno español, incluidos Iglesias y Díaz, saben que para acceder a los 144.000 Meuros de los fondos de reconstrucción Covid hay que cumplir dos condiciones: no derogar las reformas laborales, pero sí recortar el sistema de pensiones.(5)



· **El mantenimiento de las bajas pensiones.** Se rechaza así una de las reivindicaciones históricas del movimiento pensionista: 1084 euros de pensión mínima. Esas pensiones bajas las cobran esencialmente mujeres.

· **El oscurantismo en la gestión de la Seguridad Social.** A pesar de que se han reconocido los gastos impropios a cargo de la SS, se seguirán produciendo hasta 2023 provocando el supuesto «déficit». El movimiento pensionista continuará exigiendo una auditoría pública e independiente de su gestión.

· **El mantenimiento de las reformas laborales y de pensiones de Zapatero y Rajoy.** Estas reformas siguen causando estragos en las condiciones laborales de la clase trabajadora y al sistema público de pensiones. Hay que derogarlas.

En resumen, esta es la política que sobre pensiones aplicará el gobierno PSOE/UP. No hay ministros malos como Escrivá, ni ministras buenas

como Díaz. Solo hay un gobierno que aplica un acuerdo de coalición, que incluye el nuevo Pacto de Toledo (ya aprobado), y que acepta también las condiciones de los Fondos Covid de la UE, que dispone además del «freno de emergencia» (6) para congelar las ayudas.

La responsabilidad del movimiento pensionista

El movimiento pensionista ha luchado contra las reformas de las pensiones y su lucha ha obtenido resultados. Se han citado dos: conquistar provisionalmente el incremento anual a partir del IPC y suspender hasta 2023 el Factor de Sostenibilidad. Aunque son victorias parciales, demuestran que los y las pensionistas tienen fuerza y capacidad para enfrentarse al gobierno. El gobierno lo sabe y por esto la redacción y algunos de los contenidos de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo parecen destinadas a desactivar al movimiento pensionista.

Sin embargo, este movimiento social se encuentra dividido en una pluralidad de plataformas y coordinadoras, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, una pluralidad que permite que existan grupos organizados de pensionistas a lo largo de todo el Estado español. Pero si estas plataformas locales no se unen, los únicos beneficiarios serán el gobierno y la patronal. En su recorrido el movimiento ha vivido muchos problemas: intentos soterrados de apoyar al gobierno PSOE/UP, la división ante la postura a tomar frente la Huelga General de Euskal Herria, el proyecto de «mejorar» el Pacto de Toledo o simplemente los personalismos. Ante el nuevo Pacto de Toledo, el movimiento pensionista necesita la unidad más que nunca.

Las recientes reuniones, por videoconferencia, de plataformas de todo el estado espa-

ñol para impulsar movilizaciones en común supone un gran paso adelante hacia la unidad de acción. El gobierno intentará por todos los medios impedirlo porque sabe que el movimiento pensionista lleva años luchando, saliendo cada semana a la calle a pesar del Covid-19 y no se ha rendido. Es, hoy por hoy, su mayor oposición social.

En este marco, la COESPE tiene un papel esencial por su implantación en todo el territorio, por su plataforma reivindicativa y su orientación hacia el movimiento obrero. Ha de ser un factor de unidad del movimiento pensionista y del movimiento obrero para facilitar y garantizar que una respuesta lo más unitaria y contundente posible a la política sobre pensiones del gobierno.

¡Gobierno quien gobierne las pensiones se defienden!

6/01/2021

Militantes pensionistas de Lucha Internacionalista

Notas

(1) <https://www.newtral.es/texto-integro-acuerdo-de-coalicion-psoe-unidas-podemos/20191230/>

(2) <https://www.lavanguardia.com/economia/20201231/6159063/diaz-avisa-apoyara-alargar-anos-calculo-pension.html>

(3) <https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106>

(4) <https://www.lavanguardia.com/economia/20201031/4986650670/nuevo-fondo-pensiones-estatal-extendera-convenios-sectoriales.html>

(5) https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20201008/sanchez-negocia-bruselas-reformas-mercado-laboral-pensiones/526448926_0.html

(6) https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20201218/ajustes-reformas-ue-aprueba-condiciones-acceder-covid/544445891_0.html

Aborto legal en Argentina

Un triunfo que tiene que ser punta de movimiento feminista en todas partes

El pasado 29 de diciembre, y en medio de una jornada histórica de movilización del movimiento feminista, el Senado de Argentina aprobaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda es un triunfo de un movimiento que hace décadas se organiza y moviliza con las consignas: «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir». De esta forma, Argentina se convierte en uno de los pocos países de Latinoamérica donde el aborto es legal -con Uruguay, Cuba, Guayana, y Ciudad de México-. El mensaje que llega al mundo es contundente: es con la lucha que ganamos nuestros derechos. Y es un impulso muy importante para las compañeras de Latinoamérica y del resto del mundo.

No ha sido una lucha sencilla, ninguna lucha lo es. Pero en este caso hablamos de un derecho que cuestiona pilares fundamentales del sistema capitalista patriarcal donde vivimos. Es que la clandestinidad del aborto es una forma de control de nuestros cuerpos, que busca, como todo tipo de violencia machista y patriar-

gar una clínica privada y que se someten a métodos *in extremis* para llevar a cabo su decisión. Por eso, como todas las cuestiones de género en nuestra sociedad, están atravesadas por la cuestión de clase: las ricas abortan, las pobres mueren. Pero, además, para nosotras el aborto es una cuestión de derechos, el de



cal, disciplinarnos, mantenernos sumisas para poder sacar más ganancias de nuestro trabajo y para continuar haciendo recaer sobre nosotras las tareas reproductivas y domésticas. Y para ello cuentan con la reaccionaria y oscurantista Iglesia Católica, y también con la justicia que a lo largo de la historia ha encarcelado y condenado a mujeres que han ejercido este derecho a pesar de la clandestinidad.

El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo es evidentemente una cuestión de salud pública porque significa acabar con la muerte evitable de mujeres, en particular de las que no pueden pa-

decidir sobre nuestro propio cuerpo, el de poder decidir libremente y planificar nuestras vidas sin las imposiciones patriarcales que pretenden hacer de nosotras una mera incubadora. Como también decían las compañeras argentinas: la maternidad será deseada o no será.

Conquistado este derecho en Argentina, ahora habrá que luchar para hacerlo efectivo, que se garantice en cada rincón del país y, particularmente, para hacer frente a la objeción de conciencia que puede ser una traba para ejercer nuestro derecho a decidir. Sin ir más lejos, aquí en Catalunya, recientemente se ha denunciado la imposibilidad de las mujeres y



lanza para el

personas gestantes en Lleida de abortar en esta provincia debido a esta cuestión. Por eso, en vez de como se ha hecho aquí, donde el gobierno de la Generalitat ha intentado resolver este problema autorizando a clínicas privadas, hay que exigir que se garantice en la sanidad pública, sin ningún tipo de discriminación ni coacción sobre la decisión de las mujeres.

El movimiento feminista tenemos que aprovechar este triunfo para volver a visibilizar con fuerza nuestras exigencias, empezando por conseguir el aborto legal donde todavía no lo es, así como para defenderlo allí donde permanentemente pretenden hacernos retroceder en este sentido. Este triunfo es un impulso particularmente para las compañeras de Polonia que sufren las políticas más reaccionarias de la región. De hecho, es un impulso que ya ha llegado a Corea del Sur donde recientemente se ha conseguido la despenalización de esta práctica.

Cómo lo demuestran las argentinas: podemos ganar.

Rosario de Mendieta



Jornada de solidaridad internacional con las compañeras de Argentina.

Alrededor del debate en el Congreso y en el Senado de Argentina se realizaron varias acciones de solidaridad en todo el mundo. En Barcelona, una vez más, la Marea Verde Barcelona realizó manifestaciones a las puertas del Consulado Argentino y también las de la Catedral. De esta forma, se señalaban los responsables de la clandestinidad del aborto que ha significado la muerte de cientos de mujeres al año tan solo en este país, donde se realizan aproximadamente 54 abortos por hora. Allí también se denunció la vulneración de este derecho en Catalunya y el Estado Español donde todavía hay trabas, como la objeción de conciencia o la necesidad de una autorización para las mujeres de 16 y 17 años o la negación de este derecho a compañeras en situación administrativa irregular. Además, no olvidemos los particulares privilegios que tiene la Iglesia Católica aquí, donde todavía está vigente el Concordato del 78 -continuidad total del franquismo- que otorga a esta reaccionaria institución nefastos privilegios.



También se hicieron sentir gritos de solidaridad con las andorranas, que sufren un estado eclesiástico, cogobernado por el arzobispado, y que ejercen este derecho gracias a las redes de autoorganización y teniendo que venir hasta Catalunya para hacerlo.

De esta forma la solidaridad internacional no fue tan solo un grito de apoyo para las argentinas, sino una herramienta para exigir los derechos por los que aquí también todavía luchamos.

Rosario de Mendieta

(viene de pág. 8.
Unamos la lucha de
las estudiantes y de
las trabajadoras)

chas de las trabajadoras y las que se dan en el seno del movimiento estudiantil. Y un buen primer paso para hacerlo puede ser fortalecer la solidaridad y la colaboración con los colectivos que luchan hoy en día por contratos dignos en las universidades o con las MIR. La unión de las luchas no implica nunca la pérdida de las reivindicaciones propias ni el debilitamiento de la soberanía de base. Es una necesidad que permite profundizar y politizar la discusión, hacerla común y extender la lucha. Hay que empezar a tejer una extensa telaraña que nos permita compartir demandas concretas y comunes entre colectivos de trabajadoras y de estudiantes.

Joan Sala
Marc Palomer
Marc del Alcázar

Notas

¹ <https://www.observatoriuniversitari.org/es/2020/07/informe-profesora-do-asociado-2020/>

² https://www.ara.cat/societat/professors-universitaris-situacio-precarietat-absoluta_0_2548545236.html

La Internacional Progresista, vino rancio en barriles nuevos

La primera cumbre virtual se realizó entre el 18 y el 20 de septiembre. Con la presencia de intelectuales moderados y celebridades, el agrupamiento es un intento de reciclaje de proyectos ampliamente superados por las experiencias políticas concretas de los pueblos y los trabajadores, en vista del agotamiento de la “marea rosa” latinoamericana, el hundimiento de Syriza en Grecia, la negativa de Sanders a romper con el Partido Demócrata y las rebeliones populares que recorrieron gran parte del mundo en 2018 y 2019.

La plana mayor de la Internacional Progresista incluye al afamado lingüista anarquista Noam Chomsky, el senador socialdemócrata Bernie Sanders; Cornel West, de los Demócratas Socialistas de Estados Unidos; el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis; las escritoras Naomi Klein, de Canadá, y Arundhati Roy, de India; la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdóttir; la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau; el candidato presidencial Luis Arce y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, del MAS boliviano; Andrés Arauz, candidato presidencial del correísmo en Ecuador; el ex presidente brasileño Lula da Silva y su ex canciller Celso Amorim; el ex alcalde y ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro; la ministra argentina Elizabeth Gómez; el diputado chileno Giorgio Jackson; el filósofo camerunés Achille Mbembe; el intelectual chavista Vijay Prashad de la India; Víctor Santa María, del sindicalismo peronista, y la embajadora Alicia Castro, de la Argentina, entre otros.

Los discursos de Chomsky y Varoufakis reflejaron las limitaciones del proyecto. Para Chomsky, hay dos internacionales en proceso de formación, una internacional reaccionaria, encabezada por Trump, que incluye a Bolsonaro, el dictador egipcio Al Sisi, a los gobiernos de Israel y la India, a las multilaterales financieras como el FMI y el BM, y al primer ministro derechista húngaro Victor Orban. Su rasgo característico sería su

autoritarismo. La Internacional Progresista tendría su bastión entre los “movimientos populares”. En el mundo actual predominaría el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, y una de las tareas primordiales de la Internacional Progresista sería “asegurar que todos entremos en pánico ahora y actuemos en consecuencia”. Desde esa concepción cabe esperar que los gobiernos capitalistas “democráticos” sean susceptibles de reaccionar a estas alarmas “progresistas”.

PROGRESISTA INTERNACIONAL

Varoufakis, por su parte, instaló la noción de que ya estamos entrando en una etapa poscapitalista, el dilema es si su economía “será autoritaria y oligárquica o democrática y social”. Ante el desastre ambiental, planteó un “acuerdo ecológico internacional” que, con un presupuesto de 8 billones de dólares anuales, podría llevar a cabo la transición de las energías fósiles hacia las energías renovables, disminuir el consumo de carne y apostar a los alimentos orgánicos. Considera que se trata de un reto análogo a la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque no solo se trate de reconstruir sino de crear nuevas tecnologías.

Si Varoufakis afirma que el “capitalismo no es compatible con la supervivencia de la humanidad”, la tibieza de sus propuestas no corresponde a esa sentencia. Llama a identificar a empresas multinacionales específicas “que abusan de los trabajadores” y realizar jornadas de boicot, por ejemplo, a Amazon. ¿Cuáles multinacionales no abusan de los trabajadores? El problema de la burocracia sindical y las necesidades organizativas de la clase trabajadora se eluden por la vía del boicot, es una falsa salida. Varoufakis cree que “el mundo del dinero y las finanzas está desvinculado del mundo de la producción” (!) y que la salida estratégica es un “socialismo de mercado” (?) bajo el principio de “un empleado, una acción, un voto”.

Como puede verse, su eje teórico es la democratización del capitalismo, y su antagonista no es la clase capitalista en su conjunto sino solo la tendencia que representa Trump. No es casual que al Movimiento Democracia en Europa (DiEM25), del que Varoufakis es referente, apoyado por Ada Colau, Baltasar Garzón, políticos verdes y filósofos como Toni Negri y Slavoj Žižek, lo animen ideas como la de democratizar a la Unión Europea.

Es inocultable la gravedad de esta encrucijada histórica, en la que se superponen la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, una recesión económica mundial, la degradación ambiental y el calentamiento global. Para los revolucionarios, la salida de fondo es que gobiernos de la clase trabajadora establezcan a nivel regional y mundial una economía socialista, democráticamente planificada con criterios de sostenibilidad, al servicio de las mayorías populares. Para los autodenominados progresistas, lo posible son las reformas en el marco capitalista, democratizando los Estados burgueses, las multilaterales como el FMI e incluso a las propias empresas transnacionales.

En todo caso, no se trata de meras diferencias teóricas. La experiencia concreta de los pueblos latinoamericanos con gobiernos “progresistas” como los de Correa, Evo Morales, Lula da Silva, Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Chávez y Maduro ha concluido en fracasos plagados de corrupción, entreguismo y depredación ambiental atroz, lo que allanó el camino a la más rancia derecha en el continente. Ninguno de estos gobiernos intentó superar las relaciones de explotación capitalistas, todos pactaron con el imperialismo y las burguesías nacionales. La mayoría de esos gobiernos, incluso, enviaron tropas de ocupación a Haití. El chavismo se abstuvo de hacerlo, pero en

cambio propició los negociados corruptos de Petrocaribe con los gobiernos títeres de la misma ocupación militar de la ONU en Haití. En las luchas populares de 2018 y 2019 el “progresismo” jugó un rol nefasto. Por ejemplo, Giorgio Jackson y la mayoría de los diputados del Frente Amplio chileno, en plena rebelión popular contra Piñera, pactaron para mantenerlo en el poder, llegando a votar a favor de instrumentos represivos, como la llamada “ley antisaqueos”. La frustrante experiencia de Syriza en Grecia o de Ada Colau en Cataluña, entre otras, dejaron resultados similares.

litarmente por Rusia, Irán, Estados Unidos, Israel y Turquía, así como por milicias pakistaníes, libanesas, iraquíes y de otros países. Los revolucionarios venezolanos nos solidarizamos con Yassin al-Haj Saleh, pues hemos comprobado que en nuestro país los miles de muertos por ejecuciones policiales, los millones de trabajadores oprimidos por relaciones de semiesclavitud con salarios mensuales de 2 dólares tampoco cuentan para esa pseudoizquierda. La ignorancia y la prepotencia intelectual “progresista” se combinan para producir una hostilidad profunda hacia el pueblo trabajador



Si el progresismo de la nueva organización está bastante desteñido, su internacionalismo es una caricatura aún peor. El escritor y ex preso político sirio de izquierda Yassin al-Haj Saleh aceptó en abril la invitación a participar en la Internacional Progresista. Pero al enviar su primera carta abierta a la página Wire, órgano de la Internacional Progresista, fue censurado y excluido, sin explicaciones. No toleraron su crítica a las capitulaciones de distintos sectores de la izquierda a la dictadura siria, la apología vergonzosa de la agresión militar rusa y la indiferencia hacia el mayor crimen internacional del presente siglo, que ha llevado a más de seis millones y medio de personas al exilio, alrededor de 30% de la población siria, país ocupado mi-

venezolano, aislándolo de la necesaria solidaridad internacionalista, como ocurre con el pueblo sirio.

Tal es la bancarrota política y moral que exhibe la Internacional Progresista. En la antología del reformismo, puede ocupar un lugar próximo a fracasos como la “quinta internacional” de Chávez, el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla. No es la organización internacionalista que necesitamos para superar revolucionariamente a este sistema capitalista de explotación humana y depredación ambiental.

Simón Rodríguez, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI

10 años de revolución en Oriente Medio y el Norte de África

Esperando la tercera ola

El 14 de enero de 2011, tras un mes de movilizaciones masivas y la convocatoria de una huelga general, Zine Abidine Ben Ali, el militar que había gobernado Túnez con mano de hierro durante casi un cuarto de siglo, huía derrotado a Arabia Saudí. Por primera vez en la historia de la región, la lucha obrera y popular barría una dictadura. Pan, trabajo y libertad, eran los gritos que sacudieron la región. El malestar causado por la desigualdad, la corrupción, la impunidad, el peso del ejército y la falta de oportunidades de una juventud tan numerosa como ignorada por los viejos aparatos políticos, estallaban provocando un terremoto en Túnez que dio más fuerza al proceso que había comenzado en Egipto, donde pocas semanas después caía el odiado mariscal Hosni Mubarak. Como un movimiento sísmico, la ola revolucionaria tenía réplicas a Libia, Bahreín, Yemen e incluso en Siria, donde Bachar Al Asad hizo realidad su lema «o yo o quemó el país».

Desde el primer minuto, el imperialismo y las burguesías de cada uno de estos países se pusieron en marcha para detener la ola revolucionaria que buscaba libertades y otra salida a la crisis económica capitalista de 2008 -como hacían los indignados en la orilla norte del Mediterráneo o en Estados Unidos. Querían volver a taponar la olla y someter el norte de África y Oriente Próximo al exopolio y el silencio. Solo en Túnez esta reacción fue en forma de una transición democrática para encauzar el proceso a través de instituciones burguesas, que se han visto forzadas a mantener unos frágiles espacios de libertad, pero queda pendiente el cambio que mejore las condiciones de vida de la mayoría, un cambio que hoy se sigue reivindicando en las calles en forma de manifestaciones y huelgas generales en las regiones empobrecidas del interior. En el resto de países el sueño de libertad y justicia social fue ahogado en sangre, con un reparto de tareas de las potencias. En Bahrein y Yemen fue el ejército de Arabia Saudí, en Libia con

la ayuda de la intervención de la OTAN ... Y la contrarrevolución se acabó imponiendo a un precio salvaje: hoy en Siria y Egipto hay cientos de miles de muertos y de presos políticos y la situación es mucho peor que en 2011.

Ahogar la revolución siria, que amenazaba no sólo el régimen más opresor de la región sino la estabilidad del conjunto de Oriente Medio, era una cuestión estratégica para las potencias regionales (Irán, Arabia Saudí, Turquía e Israel); Estados Unidos, que entonces intentaban salir del avispero de Irak, no se podía permitir perder aún más el control en la zona y Rusia quería aprovechar la ocasión para dejar claro que no se la puede marginar en el tablero internacional. Y todos querían evitar el ejemplo de una revolución triunfante en el corazón de Oriente Medio, que podría tener consecuencias incalculables. Cada uno desde sus intereses maniobró contra la revolución, con el resultado de un baño de sangre que no sólo debía servir para aleccionar al pueblo sirio: debía ser

un aviso a navegantes. *«Si osas levantarte, acabarás como los sirios, con cientos de miles de muertos y la mitad de tu gente en el exilio»*, era el mensaje.

«A los sirios nos decían que si nos levantábamos contra el régimen acabaríamos como Somalia ... después de nuestra revolución, la amenaza contra todos los pueblos de la región fue que se convertirían en una



LES ALGÉRIENS S'APPRÊTENT À ENTRER EN 2021



Viñeta del dibujante argelino Diem, donde se lee: «Los argelinos se aprestan a comenzar el 2021. Parece que no están demasiado calientes».

que comenzó en Túnez en diciembre de 2010 fue el inicio de un tsunami social y político con una onda expansiva larga y compleja. Un proceso contradictorio en el que la dialéctica entre la revolución y la contrarrevolución aún no ha dicho la última palabra.

Cuando muchos ya habían dado por muerta aquella mal llamada «primavera árabe», en 2019 llegó una segunda ola desde Argelia a Iraq, pasando por Sudán y el Líbano. Nuevamente millones de jóvenes y trabajadores volvieron a salir a la calle contra el poder militar, contra la corrupción, contra sistemas políticos sectarios. Una segunda ola que tenía un fuerte componente político y que había aprendido de los aciertos y los errores de la primera. Porque las causas del malestar persistían y se habían agravado y que los regímenes no sabían dar respuesta y continuaban aferrándose ciegamente al poder. La corrupción y la falta de libertades, la crisis económica y el agotamiento de los modelos basados en los hidrocarburos, la falta de reformas y el rápido crecimiento demográfico continúan marcando profundas líneas de fractura en un capitalismo que cada día tiene menos margen

nueva Siria», me contaba hace unos días la activista Zaina Erhaim, que volvió a Siria para sumarse a la revolución la primavera de 2011 junto a Razan Zaitouneh, la abogada defensora de los derechos humanos que fue apuntada por el régimen y secuestrada después por un grupo integrista. La guerra en Siria cumplirá diez años en marzo como el conflicto más sangriento del siglo y el régimen de Assad, que ha vendido el país a la ocupación de Irán y sobrevive militarmente gracias al apoyo aéreo ruso, sólo puede mantenerse en el poder con una represión feroz.

ron árabes, sino que las minorías en la región como los pueblos kurdos o amazigh también tuvieron un papel protagonista. Y tampoco el tan cacareado «invierno islamista» supuso el final. La ola revolucionaria

Siria debía ser el cortafuegos a la ola revolucionaria, pero se equivocaron todos los que emitieron su certificado de defunción en forma de «invierno islamista». No fue una «primavera árabe», porque sus transformaciones, a pesar de todo, fueron mucho más profundas y complejas que las del Este Europeo -y porque tampoco fue-



Daraa (pueblo de Siria donde empezó la revolución pronto hará 10 años). La pintada dice: «Mientras haya dictadores, nosotros seremos revolucionarios. Que el 2021 nos lleve cosas buenas.»



de maniobra para ni siquiera calmar la protesta con las migas del pan.

Esta segunda ola se cerro en falso este año con la pandemia. En Argelia fue el mismo movimiento del Hirak contra el poder militar que impidió el quinto mandato de Buteflika quien decretó una «tregua sanitaria» para evitar la propagación del virus. En el Líbano la brutal represión de las protestas tras la explosión de Beirut ha vuelto a silenciar las calles. El pueblo argelino vuelve a tener un presidente viejo y enfermo que se marcha a curarse al extranjero y las maniobras de reacción democrática para cambiarlo todo sin que nada cambie han sido un rotundo fracaso que se ha

evidenciado con los bajísimos niveles de participación en tanto a las elecciones presidenciales como el referéndum constitucional. En el Líbano el régimen no encuentra más opciones que volver a poner a Saad Hariri al frente del gobierno, el primer ministro contra quienes estallaron las protestas en octubre de 2019. En Irak, después de los más de seiscientos asesinados a manos del ejército y las milicias, vuelven las protestas contra la inflación. Los regímenes han aprovechado la tregua para incrementar la represión en lugar de poner todos los esfuerzos en detener la pandemia.

Habrà más movilizaciones en Oriente Próximo y el Magreb y

los regímenes que se aferran al poder continuarán acumulando fracasos e ilegitimidad. La aparente tranquilidad del 2020 en la región es engañosa porque las luchas no han sido derrotadas, sino que se han contenido por la pandemia. Pero nuevamente, las razones de fondo del malestar continuarán, aunque agravadas por el impacto social y económico de la crisis del coronavirus. La gente continuará luchando para tener una vida digna y unos gobiernos que garanticen servicios sociales y salud y oportunidades económicas. Ahora la pregunta es dónde y cuándo empezará la tercera ola.

Cristina Mas

Puedes suscribirte a nuestra revista mensual (a escoger versión en castellano o en catalán) enviando tus datos al apartado de correos y haciendo el ingreso por un año en la cuenta corriente: ES64 2100 3459 3821 0022 0515 (25 euros si tenemos que mandártelo por correo dentro del Estado español). La suscripción de entrega en mano es de 17 euros, y podéis hacerla poniéndoos en contacto con cualquier militante del grupo.

Publicación mensual de Lucha Internacionalista. Dip. legal B-38619-2005 Lucha Internacionalista no se hace responsable de la opinión expresada en los artículos firmados.

Lucha Internacionalista es una organización trotskista. Nuestro objetivo es la revolución socialista, para acabar con el capitalismo y construir el socialismo. Impulsamos la lucha obrera y joven, y la democracia obrera. Defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es negado por el Estado Monárquico, un régimen que hay que abolir. Nuestra lucha es internacionalista: impulsamos la reconstrucción de la IV Internacional.

Aquí nos encuentras

✉ LUCHAINT@TELEFONICA.NET
📷 [LLUITA.INTERNACIONALISTA](https://www.instagram.com/LLUITA.INTERNACIONALISTA)
🐦 [@LUCHAINT](https://twitter.com/LUCHAINT)
📘 [@LINTERNACIONALISTA](https://www.facebook.com/LINTERNACIONALISTA)

LI